

La Organización Internacional Demócrata de Centro, IDC, expresa su preocupación por la detención del expresidente colombiano Álvaro Uribe Vélez, ordenada por la Corte Suprema de Justicia de ese país, en el marco de un proceso que se sigue en su contra por supuesta manipulación de testigos. La defensa del ex Presidente ha puesto de presente las divergencias que él ha tenido con ese alto tribunal desde el año 2005, que han causado de manera injusta, persecución y graves perjuicios a familiares y ex colaboradores de su gobierno. También denuncian una larga lista de irregularidades en su propio proceso, como la maniobra de un magistrado para pasarlo de acusador a acusado, la interceptación ilegal de su teléfono durante más de un mes “por error” y sin orden judicial, la omisión de pruebas solicitadas por sus abogados que corroborarían su inocencia, la imposibilidad de controvertir pruebas de cargo y la filtración selectiva y parcial de piezas procesales sujetas a reserva a periodistas y medios de comunicación, como mecanismo para influenciar a la opinión pública, entre otras. Algunos medios de comunicación, han denunciado además ante la opinión pública, múltiples hechos que ponen en duda la imparcialidad de algunos de los magistrados a cargo del caso, como vínculos económicos y contractuales con el gobierno de Juan Manuel Santos, acérrimo adversario político del ex Presidente Uribe. La persecución judicial y el acoso mediático de que es objeto es parte de una estrategia cuidadosamente orquestada por la izquierda radical Colombiana, que busca desinstitucionalizar al país y criminalizar a parte de sus líderes, al estilo de lo sucedido en el año 1998 en Venezuela. Con la presente Resolución la Organización Internacional Demócrata de Centro IDC:

1. Hace llegar al Ex Presidente Álvaro Uribe Vélez, su solidaridad y respaldo, e insta a las autoridades judiciales colombianas a garantizar su derecho a defenderse en libertad.
2. Convoca a las organizaciones internacionales, para que lleven a cabo la veeduría sobre el caso y se pronuncien de conformidad con sus hallazgos. De igual manera, las invita a denunciar los intentos de determinados actores, por debilitar la institucionalidad democrática del país.
3. Invita a la academia, a aportar análisis y contexto a los colombianos, acerca de la evidente estrategia que se promueve desde redes sociales, basada en desinformación, falsas noticias e impulso de la cultura del odio, para sembrar desorden y anarquía en el país. La dramática autodestrucción que se ha impuesto a los venezolanos desde el arribo al poder de la izquierda radical es un testimonio potente y cercano acerca de un camino que Colombia tiene que evitar a toda costa.
4. Expresa su solidaridad y apoyo a los Partidos Políticos colombianos, comprometidos a estudiar en profundidad la problemática de la administración de justicia y a promover las reformas necesarias para que el pueblo colombiano tenga un sistema de justicia organizado y respetable, que actúe con imparcialidad, transparencia, eficacia y rapidez, libre de corrupción y de presiones políticas.
5. Alienta al gobierno y al pueblo de Colombia, a construir consensos que permitan superar las dificultades de la hora, faciliten la recuperación económica y la implementación de las soluciones que se requieran, para superar la grave crisis social provocada por la pandemia de COVID-19 y retomar así, la ruta de la seguridad y el crecimiento del país.